

1. *Cómo se estructuran las manifestaciones de protesta.*

**Frances Fox Piven
& Richard Cloward¹**

Traducción de Cecilia Peral
(cp_traducciones@yahoo.com.ar) y
Mariana Claudia Arias
(marianaarias74@hotmail.com)

CAPÍTULO 1: Cómo se estructuran las manifestaciones de protesta

El sentido común y la experiencia histórica se combinan para sugerir una visión simple pero convincente del origen del poder en la sociedad. Planteado crudo pero claramente: quienes controlan los medios de coacción física y los medios de producción de la riqueza tienen poder sobre quienes no tienen ese control. Eso es cierto cuando el medio de coacción es la fuerza primitiva de una casta de guerreros y también cuando se trata de la fuerza tecnológica de un ejército moderno. Y es cierto cuando el control de la producción está en manos de sacerdotes que controlan los misterios del calendario del que depende la agricultura o de grandes financistas de los que depende la producción industrial. Como la fuerza de coacción puede utilizarse para controlar los medios de producción de la riqueza y el control de la riqueza puede utilizarse para obtener fuerza de coacción, esas dos fuentes de poder tienden con el tiempo a confluir en una clase dominante.

El sentido común y la experiencia histórica también indican que esas fuentes de poder están protegidas y aumentan porque el poder no sólo se usa para controlar las acciones de hombres y mujeres, sino también para

controlar sus creencias. Lo que algunos llaman superestructura, y otros cultura, comprende un sistema complejo de creencias y comportamientos rituales que define lo que está bien y lo que está mal; lo que es posible y lo que es imposible; y la forma en que hay que comportarse a partir de esas creencias. Puesto que la superestructura de creencias y rituales se desarrolla en un contexto de desigualdad de poder, es inevitable que las creencias y los rituales refuercen la desigualdad, presentando al poderoso como un ser divino y a los que se oponen, como seres malvados. Por lo tanto, las luchas de clase que, de lo contrario, serían inevitables en sociedades profundamente desiguales, en general no parecen posibles ni apropiadas desde la perspectiva de los que viven inmersos en la estructura de creencias y rituales creada por dichas sociedades. Las personas cuyo único recurso posible de lucha es cuestionar las creencias y rituales establecidos por los gobernantes, generalmente no lo hacen.

Lo que el sentido común y la experiencia histórica sugieren que ha sucedido en muchas sociedades, también es verdad con respecto a las sociedades capitalistas modernas, entre ellas la de Estados Unidos. El origen del poder es el control de las fuerzas de coacción y de los medios de producción. Sin embargo, las sociedades capitalistas no legitiman este hecho presentando al poderoso como un ser divino, sino ocultando su existencia. Por eso las campañas electorales proclaman que la base para la acumulación y el uso del poder no son la fuerza ni la riqueza sino el electorado. Sin duda, la riqueza está distribuida en forma desigual. Sin embargo, el derecho al voto está distribuido en forma amplia y casi igualitaria y, al ejercer este derecho, se supone que los hombres y las mujeres determinan quiénes serán sus gobernantes y, por lo tanto, qué deben hacer para continuar en su mandato.

Los analistas del poder, que también viven dentro de los límites establecidos por los rituales y las creencias de la sociedad a la que pertenecen, han contribuido a esta confusión

¹ Frances Fox Piven and Richard Cloward, "The Structuring of Protest", *Poor People's Movements*, New York: Vintage Books, 1979.

al afirmar que las elecciones contrarrestan otras fuentes de poder. Incluso expertos politólogos norteamericanos partieron del supuesto de que existen dos sistemas de poder, uno basado en la riqueza y el otro, en los votos; y se han dedicado a desentrañar la influencia relativa de uno en el otro. Se ha estimado que esta cuestión es tan intrincada y compleja que requiere continuas investigaciones en diversos escenarios políticos, con métodos sujetos a las más rigurosas restricciones empíricas. (“No se puede afirmar nada categórico acerca del poder en una comunidad” fue el célebre dictamen de Polsby.) La respuesta que surgió a partir de esas investigaciones fue que los procedimientos de representación electoral originaban una dispersión importante del poder en un mundo nada perfecto. Así se llegó a la conclusión de que quienes desafiaban los procedimientos del estado democrático liberal para luchar contra sus gobernantes eran agitadores peligrosos o simplemente tontos.

En la década del sesenta, la tradición pluralista dominante estaba desacreditada, al menos entre la gente de ideología izquierdista que comenzaba a cuestionar esa perspectiva, movida por los estallidos de resistencia entre las minorías y los estudiantes. En los debates posteriores se sostuvo que no había dos sistemas de poder, sino que el sistema basado en la riqueza y la fuerza aplastaba el poder del sufragio. Los críticos decían que el error del pluralismo radicaba en su imposibilidad de reconocer las diversas maneras en que la riqueza y circunstancias concomitantes desvirtuaban los procedimientos electorales, impidiendo totalmente la participación de muchos y engañando a otros, llevándolos a elegir “opciones” electorales predeterminadas. Los pluralistas también se habían equivocado al pasar por alto la permanente actitud de favorecer los intereses de las élites que caracterizaba a estructuras gubernamentales presuntamente neutrales, independientemente del mandato del electorado.

No es nuestra intención hacer un resumen de las críticas, que no fueron de ningún modo simples ni de un mismo tenor. Sólo queremos señalar que la dificultad radicaba, en gran medida, en llegar a comprender que las formas de participación y no participación en los procedimientos electorales no eran decisiones políticas tomadas libremente por hombres y mujeres, como los pluralistas habían insinuado. Tanto las formas de participación como el grado de influencia resultante estaban sistemáticamente determinados por la ubicación en la estructura de clases. Fue una revelación importante y, una vez alcanzada, no se tardó en llegar a la conclusión de que, mientras los grupos de las clases más bajas se atuvieran a las normas que rigen el sistema electoral, tendrían poca influencia. Por lo tanto, quedó claro, al menos para algunos de nosotros, que las tácticas de protesta en contra de las normas políticas no eran simplemente el recurso de los agitadores y los tontos. Para los pobres, eran el único recurso.

Pero habiendo llegado hasta aquí, no se ha avanzado más. Las conclusiones de las críticas a los procesos electorales no se tuvieron en cuenta en los pocos estudios llevados a cabo sobre la naturaleza de la protesta. Desde una perspectiva intelectual, este descuido resulta asombroso. Desde una perspectiva política, es muy fácil de explicar teniendo en cuenta las tendencias dominantes de nuestra tradición. En pocas palabras, el argumento principal de este capítulo es que la protesta *tampoco* es una cuestión de libre elección: no está al alcance de todos los grupos en todo momento y, durante la mayor parte del tiempo, no está al alcance de las clases más bajas. *En las ocasiones en que la protesta de los pobres es posible, tanto la forma que debe adoptar como el impacto que puede tener están delimitados por la estructura social, de modo tal que generalmente su alcance y su fuerza se reducen.* Antes de explicar estas cuestiones, debemos definir a qué nos referimos cuando hablamos de un movimiento de protesta, dado que las definiciones habituales han hecho que tanto analistas como activistas

pasen por alto o desacrediten muchas de las protestas que, de hecho, ocurren.

El nacimiento de un movimiento de protesta supone una transformación de la conciencia y del comportamiento. El cambio de conciencia tiene, al menos, tres aspectos diferentes. En primer lugar, “el sistema” –o aquellos aspectos del sistema que la gente experimenta y percibe– pierde legitimidad. Muchos hombres y mujeres que generalmente aceptan la autoridad de los gobernantes y la legitimidad de los acuerdos institucionales llegan a la conclusión de que, en cierta medida, ambos son injustos y están errados.² En segundo lugar, individuos que suelen ser fatalistas, que creen que los acuerdos existentes son inevitables, empiezan a hacer valer “derechos” que implican exigencias de cambio. En tercer lugar, surge una nueva sensación de potencia: personas que suelen considerarse indefensas empiezan a creer que tienen alguna capacidad de cambiar su suerte.

El cambio de comportamiento también es sorprendente y, por lo general, más fácil de reconocer, al menos cuando se manifiesta a través de huelgas, marchas o disturbios. Esas acciones parecen incluir dos elementos distintivos. En primer lugar, las masas empiezan a oponer resistencia: no respetan las tradiciones ni las leyes que cumplen habitualmente y desprecian a las autoridades que acostumbran obedecer. En segundo lugar, la resistencia se manifiesta en forma colectiva, de suerte que los involucrados actúan como miembros de un grupo, y no como individuos aislados. Las huelgas y los

² Al respecto, Max Weber escribe: “El grado en que las ‘acciones comunales’ y, posiblemente, las ‘acciones societales’ surgen de las ‘acciones de masa’ de los miembros de una clase está relacionado con condiciones culturales generales, especialmente con las de tipo intelectual. También está vinculado con el alcance de los contrastes ya existentes y, especialmente, con la *transparencia* de las relaciones entre las causas y las consecuencias de la ‘situación de clase’. Por más diferentes que puedan ser las oportunidades en la vida, este hecho en sí mismo, según lo indica la experiencia, de ninguna manera origina la ‘acción de clase...’ ” (184, énfasis en el original).

disturbios son claramente formas de acción colectiva. Sin embargo, incluso algunas formas de rebeldía que parecen actos individuales, como el delito, faltar a la escuela o causar incendios intencionales, pueden tener una dimensión colectiva, aunque en forma más ambigua, porque quienes llevan a cabo esos actos pueden creer que forman parte de un movimiento más amplio. Los actos de rebeldía aparentemente atomizados pueden considerarse parte de un movimiento cuando los individuos involucrados creen actuar como miembros de un grupo y comparten razones comunes de protesta.

Al hacer hincapié en los objetivos comunes de producir cambios sociales, en cuanto característica que distingue los movimientos sociales, las definiciones predominantes han terminado por negar el carácter político de muchas formas de protesta. Por eso, aun cuando deberíamos resistir el impulso de multiplicar los usos idiosincrásicos, creemos que la diferencia entre nuestra definición de los movimientos sociales y las que suelen encontrarse en la vasta bibliografía sociológica no es una mera cuestión de definición. Por ejemplo, Joseph Gusfield define los movimientos sociales como “actividades y creencias compartidas socialmente, que tienen como objetivo exigir cambios en algún aspecto del orden social [...] Lo que caracteriza a un movimiento social como un tipo particular de agente de cambio es su cualidad de grupo organizado y cohesionado” (2, 453). Análogamente, John Wilson dice: “un movimiento social es un intento consciente, colectivo y organizado de causar un cambio profundo del orden o resistirse a él social a través de medios no institucionalizados” (8).

El acento que se pone en las intenciones conscientes de estas prácticas refleja una confusión entre los movimientos de masas y las organizaciones formales que suelen surgir en la cresta del movimiento, dos fenómenos que, aunque entrelazados, son diferentes

entre sí.³ De hecho, tal como lo sugieren estas definiciones, las organizaciones formales plantean objetivos precisos y consensuados para generar cambios sociales, pero esos objetivos pueden no ser evidentes en los levantamientos de masas (aunque otros, en el papel de observadores y analistas, incluidos nosotros, bien puedan atribuírselos). Además, nuestro énfasis está puesto en la rebeldía colectiva como característica clave y distintiva de los movimientos de protesta. Sin embargo, la rebeldía suele ser omitida o subestimada en las definiciones canónicas simplemente porque no suele ser una característica de las actividades de las organizaciones formales que surgen en la cresta de los movimientos de protesta.

Cualesquiera sean las fuentes intelectuales que llevan a este error, el resultado de equiparar los movimientos con la organización de los mismos –y, por lo tanto, exigir que las protestas tengan un líder, una constitución, un programa legislativo o, al menos, una bandera antes de ser reconocidas como tales– implica no prestar atención a muchas formas de inquietud política y relegarlas, por definición, al terreno más impreciso de los problemas sociales y los comportamientos que se apartan de la norma. En consecuencia, hechos como el ausentismo escolar, el aumento del ausentismo laboral, la cantidad cada vez mayor de solicitudes de asistencia social, la creciente mora en los pagos de los alquileres, rara vez atraen la atención de los analistas políticos. Una vez que se decide por definición que nada político ha ocurrido, no hay nada que explicar, al menos en términos de protestas políticas. Y, una vez que se logra, de este modo, no reconocer ni estudiar la protesta, ya no se pueden plantear ciertas preguntas bastante obvias e importantes acerca de ella.

³ De este modo, Zald y Ash usan el término “organizaciones de movimientos sociales” para abarcar ambas formas de acción social. En su obra posterior, Roberta Ash hace una distinción entre los movimientos sociales y las organizaciones de los mismos, pero sin dejar de poner el acento en los objetivos precisos como característica que define a los movimientos.

Límites institucionales a la incidencia de la insurgencia de masas

Aristóteles creía que la causa principal de la guerra interna era la desigualdad, que los menos favorecidos se rebelaban para lograr la igualdad. Pero la experiencia ha demostrado que estaba equivocado en la mayoría de los casos. A pesar de que la desigualdad manifiesta ha sido una constante en la historia, las rebeliones han sido infrecuentes: Aristóteles subestimó el poder de control de la estructura social sobre la vida política. Por dura que sea la suerte que le toque vivir, la gente suele aceptarla pasivamente. Se aviene al perfil habitual de la vida cotidiana de su comunidad y cree que es algo justo e inevitable. Hombres y mujeres cultivan el campo a diario, alimentan los hornos con carbón, trabajan en los telares obedeciendo las reglas y el ritmo necesarios para ganarse la vida. Esperanzados, se aparean y tienen hijos y, enmudecidos, los ven morir; cumplen con las normas de la iglesia y de la comunidad y respetan a sus gobernantes, en un esfuerzo por conseguir un poco de compasión y consideración. En otras palabras, la mayor parte del tiempo, la gente se adapta a las estructuras institucionales que la atrapan, que regulan los premios y los castigos de la vida cotidiana y que parecen ser la única realidad posible.

Quienes reciben las recompensas más exiguas, que son los más oprimidos por la desigualdad, también se muestran aquiescentes. A veces son los más dóciles porque tienen pocas formas de defenderse contra los castigos que les pueden imponer si se rebelan. Además, la mayoría de las veces y en la mayor parte de los países, especialmente en Estados Unidos, se les hace creer a los pobres que la miseria en la que están sumidos es merecida, y que la riqueza y el poder en manos de otros también son merecidos. En sociedades más tradicionales, se cree que las marcadas desigualdades sociales son de origen divino o forman parte del orden natural de las cosas. En sociedades más modernas, como la norteamericana, la riqueza y el poder se atribuyen a cualidades

personales de laboriosidad o talento, de donde se desprende que quienes poseen poco o nada tienen exactamente lo que se merecen. Como observa Edelman en su estudio acerca de las convicciones políticas en Estados Unidos:

Para mantener la aquiescencia de los pobres norteamericanos se necesitaron menos coacción y menos garantías de seguridad social que en otros países desarrollados, incluso países autoritarios, como Alemania, o particularmente pobres, como Italia. La culpa y el concepto que los pobres tienen de sí mismos mantuvieron su docilidad (1971, 56).

En resumen, las clases más bajas suelen aceptar su suerte, y esa aceptación puede darse por sentada: los gobernantes no necesitan negociar para conseguirla. Esa capacidad de las instituciones de una sociedad para imponer docilidad política es la manera más evidente de estructuración social de la protesta, en el sentido de que la mayor parte del tiempo hay impedimentos estructurales para que ésta se manifieste.

Sin embargo, los pobres a veces se rebelan. Desafían a las autoridades tradicionales y las normas establecidas por ellas. Exigen una reparación por los agravios sufridos. La historia de Estados Unidos está colmada de acontecimientos de este tipo, desde los levantamientos de los propietarios, arrendatarios y esclavos en la época colonial, hasta las rebeliones posrevolucionarias de los deudores, pasando por los estallidos periódicos de huelgas y protestas de los trabajadores industriales, y los disturbios que tuvieron lugar en los guetos durante el siglo XX. En cada una de esas ocasiones, las masas de los pobres lograron, en cierta medida y aunque por un corto plazo, superar la vergüenza generada en ellos por una sociedad que los culpa por sus tribulaciones. De alguna manera, pudieron romper las cadenas de la conformidad impuestas por el trabajo, la familia, la comunidad y por cada aspecto de la vida institucional. De alguna manera, lograron sobreponerse al temor provocado por la

policía, la milicia y los servicios de seguridad de las empresas.

Cuando, de hecho, surge la protesta, cuando las masas de los que generalmente son dóciles se rebelan, significa que ha habido una gran transformación. La mayor parte de la bibliografía sobre la insurgencia popular se ha dedicado a identificar las condiciones que preceden a esa transformación (generalmente por el interés de evitar los disturbios políticos resultantes o ponerles freno). Más allá de los desacuerdos entre las distintas escuelas de pensamiento, que son considerables, hay un acuerdo general sobre el hecho de que la aparición de levantamientos populares refleja cambios profundos en la sociedad toda. Que haya acuerdo en este sentido es importante porque es otra forma de formular nuestra proposición de que habitualmente existen impedimentos estructurales para que se manifieste la protesta. El punto de acuerdo es que las clases más bajas se rebelarán sólo en condiciones excepcionales y, por lo tanto, según nuestros propios términos, *sólo en condiciones excepcionales tienen las clases más bajas la oportunidad socialmente determinada de ejercer presión para defender sus propios intereses de clase.*

La validez de esta afirmación se deduce de cualquiera de las teorías más importantes sobre la rebelión civil consideradas individualmente. Cuando se consideran todas las perspectivas teóricas al mismo tiempo y se las estudia a la luz de los acontecimientos históricos que se analizan en este libro, se llega a la conclusión de que, a pesar de que distintas teorías ponen el acento en diferentes tipos de dislocaciones sociales, la mayor parte de esas dislocaciones ocurrieron simultáneamente en las décadas del treinta y del sesenta. No es necesario creer que las diversas perspectivas teóricas más importantes son igualmente válidas para admitir que todas ellas pueden arrojar al menos un poco de luz sobre la serie de dislocaciones que precedieron al estallido de la protesta, al menos en los períodos que estudiamos. Esto sugiere que, para que la protesta pueda surgir no sólo hace falta una

dislocación social significativa, sino que probablemente debe haber una secuencia o combinación de dislocaciones antes de que la ira subyacente alcance niveles elevados y pueda encontrar expresión en la rebelión colectiva.

Parece útil dividir las perspectivas sobre la insurgencia según pongan el acento en las presiones que llevan a los estallidos o en el fracaso de la capacidad reguladora de la sociedad, fracaso que permite que esos estallidos ocurran y adopten la forma de protesta política. Así, entre los teóricos que ponen el acento en las presiones se podrían incluir a los que hacen hincapié en el cambio económico como una precondition de la agitación civil, se trate ese cambio de una mejora económica o de un aumento de la pobreza. Los cambios económicos abruptos alteran, desde luego, la relación entre la expectativa generada en hombres y mujeres, y las condiciones que, de hecho, experimentan. Si se lleva a la gente a esperar más de lo que recibe, es probable que sienta frustración y cólera.³ Siguiendo a de Tocqueville, algunos analistas ponen el acento en la frustración producida en períodos de mejoras económicas que pueden generar expectativas superiores a los beneficios económicos reales.⁴ Otros, que siguen más de cerca la tradición de Marx y Engels,⁵

⁴ Tal vez el exponente más conocido de la teoría de la “privación relativa” como causa de los conflictos civiles que sostienen muchos teóricos sea Ted Robert Gurr (1968, 1970). Véanse también Feierabend, Feierabend, y Nesvold. Hay una crítica excelente de los teóricos políticos que basan su obra en esta teoría en Lupsha.

⁵ Tanto de Tocqueville como sus acólitos incluyen las condiciones de liberalización política y el consecuente aumento de las expectativas políticas como precursores posibles de los conflictos civiles. Es probable que el más conocido de los teóricos contemporáneos que pone el acento en el aumento de las expectativas sea James C. Davis que, sin embargo, plantea una variante de la teoría conocida como la “Curva J”. Según Davies, los conflictos civiles ocurren sólo después de largos períodos de mejora seguidos de recesión económica o represión política.

⁶ Sin embargo, las ideas de Marx y Engels son más específicas y amplias desde un punto de vista histórico que la teoría de la privación relativa, y se las podría describir mejor como ideas que no son incompatibles

consideran que son las tribulaciones nuevas e inesperadas las que generan frustración e ira, y el potencial para los conflictos civiles. Sin embargo, como otros han señalado, este desacuerdo no es insuperable desde el punto de vista teórico. El hecho de que unos consideren que son los tiempos de prosperidad y otros, los de miseria, los que originan disturbios en las clases bajas puede estar más relacionado con la reflexión de cada autor sobre los casos empíricos que analiza – así como también, posiblemente, con su afinidad de clase– que con grandes diferencias conceptuales.⁶ Tanto los teóricos que ponen el acento en el aumento de las expectativas como los que hacen hincapié en el incremento de la pobreza están de acuerdo en que cuando las expectativas de los hombres y las mujeres se ven frustradas, es posible que reaccionen airadamente. Y, si bien las tribulaciones repentinas, más que el aumento de las expectativas, son probablemente las condiciones que preceden a la agitación de masas, ambos tipos de cambio precedieron los estallidos mencionados en las páginas que siguen.⁷

con esta teoría. Las crisis económicas y las tribulaciones concomitantes desencadenan la lucha proletaria no sólo por el empobrecimiento extremo del proletariado ni por el crecimiento del ejército de reserva de desocupados durante esos períodos, sino porque los períodos de crisis económica revelan las contradicciones del capitalismo, particularmente la contradicción entre las fuerzas productivas socializadas y la anarquía que entraña la propiedad y el intercambio privados. Según las mismas palabras de Engels: “El modo de producción se rebela contra la forma de intercambio. La burguesía se ve incapacitada de seguir manejando sus propias fuerzas sociales productivas” (1967). En otras palabras, la privación es sólo un síntoma de un conflicto mucho más profundo que no puede ser resuelto dentro de la formación social existente.

⁷ Geshwender señala que las hipótesis del aumento de las expectativas y de la privación relativa (así como la de la inconsistencia de estatus) se pueden conciliar desde el punto de vista teórico.

⁸ Barrington Moore afirma rotundamente que los principales movimientos revolucionarios urbanos de los siglos XIX y XX “fueron revoluciones que surgieron por la desesperación, y ciertamente no por un aumento de las expectativas, como algunos teóricos de la revolución pueden hacernos llegar a suponer”. Sin embargo, Snyder y Tilly parecen no estar de acuerdo y

Aun así, otros teóricos que ponen el acento en las presiones no prestan tanta atención a las tensiones generadas por las incoherencias entre las circunstancias económicas y las expectativas sino que, siguiendo a Parsons (1951), amplían ese tipo de modelo para incluir las tensiones provocadas generalmente por los cambios estructurales, por las incoherencias entre los diferentes “componentes de la acción” que llevan al estallido de lo que Parsons denomina “comportamiento irracional” (1965). Sin embargo, la amplitud y la imprecisión de ese modelo probablemente lo hagan muy poco útil. Según las palabras de Charles Tilly: “Hay suficiente ambigüedad en conceptos como “cambio estructural”, “tensión” y “agitación” para mantener a una flotilla entera de filólogos en alta mar de por vida” (1964, 100).

Creemos que el error más importante en la obra de todos los teóricos que ponen el acento en las presiones es que se basan en el supuesto tácito e incorrecto de que los cambios económicos y estructurales son algo fuera de lo común, y que la estabilidad y el consenso espontáneo que ella fomenta son el estado habitual de las cosas. Los cambios económicos y, es de suponer, también los estructurales (si supiéramos con claridad a qué nos referimos con esta expresión) son características más habituales que infrecuentes en las sociedades capitalistas. Sin embargo, las pruebas históricas sugieren que los cambios económicos extremadamente rápidos aumentan la frustración y la irritación que mucha gente siente la mayor parte del tiempo.

La otra serie de perspectivas teóricas sobre los levantamientos populares pone el acento en el fracaso de la capacidad reguladora de las instituciones sociales como el factor fundamental que lleva al conflicto civil. Tales explicaciones son sostenidas por una amplia gama de teóricos que van desde Hobsbawm – que considera que los conflictos parten de la

señalan que ni la fluctuación a corto plazo de los precios ni la producción industrial permitían prever la incidencia de la violencia colectiva en Francia en los siglos XIX y XX (1972).

desorganización social y pone el acento en el fracaso de los controles reguladores implícitos en las estructuras y rutinas de la vida cotidiana– pasando por Kornhauser, que sostiene que los cambios sociales más importantes –la depresión, la industrialización y la urbanización– rompen los lazos que vinculan a la gente con las múltiples asociaciones secundarias que normalmente controlan el comportamiento político (1959), hasta los que hacen hincapié en las divisiones internas entre las élites como el factor que desata el descontento popular. Tomadas en conjunto, estas perspectivas que se basan en la desorganización social permiten comprender cabalmente, aunque de manera general, la relación entre los cambios sociales, el fracaso de los controles sociales –lo que Ash llama la “desrutinización” de la vida (164-167)– y el estallido de la protesta.⁸ Las teorías de la desorganización social sugieren que, al mismo tiempo que generan frustración, los períodos de cambios rápidos tienden a debilitar los controles reguladores inherentes a las estructuras de la vida institucional.

⁹ Así como las teorías de la privación relativa no son incompatibles con la interpretación marxista de los orígenes de la protesta en las clases bajas y obreras, tampoco lo es necesariamente el acento en la desorganización social (aunque es claro que la mayoría de los que defienden esa perspectiva no son marxistas). Una interpretación marxista de la protesta reconocería la importancia tanto de la privación relativa como de la desorganización social, aunque no las tomaría como causas generalizables desde el punto de vista histórico, sino como síntomas de las contradicciones históricas específicas de la sociedad capitalista. La obra de Bertell Ollman sobre la estructura del carácter como factor inhibitorio de la conciencia social y la acción de clase contribuye a hacer explícita la relación entre la desorganización social y los levantamientos de masas desde una perspectiva marxista. Ollman sostiene que el “‘miedo a la libertad’ del proletariado” y su sumisión ante la autoridad [...] son, después de todo, simples intentos de repetir en el futuro lo que se hizo en el pasado” (42). Pero, desde luego, los períodos de grandes crisis sociales pueden forzar un cambio en esos perfiles de carácter, aunque sólo sea impidiendo la repetición en el futuro de lo que se hizo en el pasado.

Más específicamente, los cambios económicos pueden ser tan perturbadores que destruyan prácticamente la estructura y las rutinas de la vida cotidiana. Hobsbawm pone de relieve efectos de ese tipo cuando relata el auge del “bandolerismo social” entre los campesinos italianos durante el siglo XIX:

Es sumamente probable que [el bandolerismo] alcance dimensiones de importancia cuando se altera el equilibrio rural tradicional: durante los períodos de grandes penurias o después de ellos –como las hambrunas y las guerras–, o en los momentos en que comunidades estáticas quedan atrapadas entre las poderosas mandíbulas del dinámico mundo moderno que pretende destruirlas y transformarlas (1963,24).

Barrington Moore destaca un tema similar:

Los principales factores que dan origen a una masa revolucionaria son un período de privaciones bastante agudas que culmina con un brusco aumento de las calamidades, sumado a el desmoronamiento de las rutinas cotidianas –conseguir alimentos, ir al trabajo, etc.– que ligan a la gente con el orden imperante.

En otras palabras, la importancia de los cambios económicos, pues, no radica simplemente en que el pueblo ve frustradas sus expectativas y, por ende, siente cólera. Ocurre que, cuando las estructuras de la vida cotidiana se debilitan, también mengua su capacidad reguladora. Así, dice Lefebvre: “Las revoluciones estallan si y sólo si en una sociedad determinada el pueblo ya no puede proseguir con su vida cotidiana; mientras pueda continuarla, las relaciones se restablecen constantemente” (32).

Para la mayoría de la gente, la vida de todos los días está ordenada por las reglas y recompensas del trabajo, que marcan cada día, cada semana y cada estación. Expulsada de esa rutina, la gente queda también fuera del marco regulador que ella impone pues el trabajo y sus recompensas también sostienen

la estabilidad de otras instituciones sociales. Cuando los hombres no ganan lo suficiente para mantener a la familia, es posible que abandonen a la esposa y los hijos, o que no se casen con las jóvenes con quienes tienen relaciones. Es más, cuando la desocupación dura mucho tiempo, pueden desintegrarse comunidades enteras porque los más fuertes y sanos emigran a otros lugares en busca de trabajo. A medida que las “reconfortantes banalidades” de la existencia se desmoronan –para usar una expresión de Edelman–, la vida cotidiana pierde su cohesión anterior (95). Los primeros indicios de la desmoralización e incertidumbre resultantes son, por lo general, los crecientes índices de delincuencia, ruptura de familias, vagancia y vandalismo.¹⁰ Siéndoles imposible adoptar los roles sociales para los cuales los han preparado, hombres y mujeres prosiguen a los tumbos su lucha para vivir, ateniéndose a las reglas o transgrediéndolas.

Por eso mismo, no ocurrió solamente que la catastrófica depresión de la década del treinta, así como la modernización y las migraciones de la década del sesenta entrañaron penurias imprevistas; la desocupación masiva y el desarraigo forzoso de comunidades enteras tuvieron otros efectos quizá tan traumáticos como los económicos. La pérdida del trabajo y la desintegración de las comunidades implicaron, por un lado, pérdida de actividades, recursos y relaciones que obraban como reguladores, de los cuales dependía la vida cotidiana y, por otro lado, la consiguiente erosión de las estructuras que

¹⁰ Debemos destacar que en su prestigiosa obra sobre la violencia colectiva en la Francia decimonónica, Charles Tilly no confirma la opinión más difundida de que hay una relación entre el delito y la violencia colectiva, o entre cualquiera de esas dos variables y el presunto impacto desorganizador del crecimiento urbano. No obstante, las pruebas indican que esas relaciones existieron en Estados Unidos en los períodos del siglo XX que nosotros estudiamos; por consiguiente no opinamos que la controversia se haya cerrado todavía. En otros aspectos, como se verá, estamos de acuerdo con el acento que pone Tilly sobre el desplazamiento de recursos como precondition de la lucha colectiva. Véase Tilly (1964) y Lodhi y Tilly (1973).

ligan a la gente a las entidades sociales existentes. Sin embargo, puede suceder que ni la frustración generada por los cambios económicos ni el derrumbe de la vida cotidiana sean suficientes para que la gente se subleve contra sus tribulaciones. Por lo común, cuando llega la adversidad, suelen imprecar a Dios o culparse a sí mismos.

Para que surja un movimiento de protesta de tales traumas cotidianos, el pueblo tiene que darse cuenta de que las privaciones y la desorganización en que está sumido están mal y, además, que pueden corregirse.¹¹ Los dispositivos sociales que habitualmente se consideran justos e inmutables tienen que verse después como injustos y modificables. Hay algo que favorece esa alteración de los valores: el grado de aflicción. Así, por ejemplo, en la década del treinta y luego en los años posteriores a la guerra, la desocupación alcanzó niveles calamitosos. Fueron muchos los que perdieron en la misma época su capacidad de ganarse el pan: sin duda, esa fue la situación en la década del treinta, cuando el índice de desocupación abarcaba a un tercio de la fuerza de trabajo. Entre los negros, la experiencia del período posterior a la Segunda Guerra Mundial fue igualmente devastadora pues los obligaron por millones a abandonar la tierra y concentrarse en los guetos urbanos. En esos barrios del centro de las ciudades, las tasas de desocupación durante las décadas del cincuenta y del sesenta eran equivalentes a las de la Gran Depresión. La escala gigantesca de estas fracturas contribuyó a acallar la sensación de culpa individual y predispuso a hombres y mujeres a ver su situación como un acontecimiento colectivo y a culpar a los gobernantes por la miseria y desorganización que padecían.

¹¹ “La turba clásica –escribe Hobsbawm– no organizaba disturbios en calidad de mera protesta sino porque esperaba conseguir algo con esas acciones. Suponía que las autoridades se mostrarían sensibles esos movimientos y probablemente que harían algún tipo de concesión inmediata [...]” (111). Rudé esgrime el mismo argumento en su exposición sobre los motines por alimentos que hicieron los pobres de las ciudades en el siglo XVIII (1964).

Es aun más probable que se produzca una alteración de valores de esta índole, o que se desenvuelva con mayor rapidez, cuando las fracturas padecidas por determinados grupos se producen en un marco de cambio e inestabilidad más amplios, en momentos en que los dispositivos institucionales dominantes de la sociedad, tal como el pueblo los entiende, ya no funcionan a ojos vistas. Así, cuando los colosales imperios industriales de Estados Unidos prácticamente detuvieron sus operaciones y los bancos simplemente cerraron sus puertas, era mucho más difícil que las masas de trabajadores empobrecidos y los que no tenían trabajo aceptaran sin chistar el mítico “estilo norteamericano”. Análogamente, aun cuando las alteraciones institucionales que precedieron a los movimientos negros de la década del sesenta no saltaban a la vista de la sociedad en su conjunto, tenían una presencia dramática para todos los desarraigados a consecuencia de ellos. Para los negros, los cambios producidos en la economía sureña significaban lisa y llanamente la desintegración del *ancien régime* de las plantaciones, y su posterior emigración a las ciudades significó para ellos arrancarse de raíz y trasladarse a una sociedad desconocida.

Por último, si bien esas conmociones institucionales objetivas hacen que la gente evalúe de otra manera su situación, las élites pueden aportar lo suyo a ese cambio de apreciación, contribuyendo así al despertar de las masas, proceso que muchos teóricos de la sociología ya han señalado. Sin duda, por lo general, a la clase dominante le interesa mantener el *statu quo* y conseguir que las clases bajas mantengan su docilidad. Sin embargo, los cambios y mudanzas institucionales muy veloces pueden afectar de manera distinta a diferentes grupos de élite, socavando el poder de algunos segmentos y apuntalando el de otros, de suerte que se produce una división. Esa discrepancia puede corroer la autoridad y la legitimidad de las normas institucionales que sostienen. Si en la consiguiente competencia por la dominación, algunos sectores de las élites procuran atraerse el apoyo de los empobrecidos

declarando que son justos sus reclamos, las esperanzas de cambio de las clases bajas se avivan y se debilita aun más la legitimidad de las instituciones que las oprimen.¹²

De hecho, aun cuando las élites no desempeñen ningún papel concreto alentando a las masas, éstas pueden inventarles un papel. Hobsbawm cuenta que, en el tumultuoso año de 1905, los campesinos ucranianos saqueaban a los burgueses y a los judíos. Pero lo hacían con la firme convicción que el nuevo edicto imperial los autorizaba a tomar lo que se les antojaba. La situación se aclara con este ejemplo de diálogo con un terrateniente:

— ¿Por qué han venido? —les pregunté.

—Para pedirle trigo, para hacer que usted nos de su trigo —respondieron varias voces al mismo tiempo...

No pude evitar recordarles cómo los había tratado durante tantos años.

—Pero, ¿qué podemos hacer? —respondieron varios.

—No lo hacemos en nombre propio sino en nombre del zar —agregó otro.

—Es la orden del zar —dijo una voz en la multitud.

—Un general distribuyó la orden por todos los distritos —añadió alguien más. (187)¹³

No es una tendencia exclusiva de los campesinos rusos. En mayo de 1968, una multitud de personas que recibían subsidios sociales y hacían una manifestación en Nueva

¹² Roberta Ash atribuye a este mecanismo la politización de las muchedumbres de Boston durante el período revolucionario. Cuando los ricos descontentos buscaron apoyo entre los pobres, las pandillas callejeras se organizaron para militar en la lucha política (70-73).

¹³ Hobsbawm y Rudé repiten el mismo argumento con respecto a las protestas de los campesinos ingleses contra los encierros: “No podían creer [...] que el Rey y el Parlamento estuvieran contra ellos. Pues, ¿cómo podía ser que la encarnación de la justicia estuviera en contra de la justicia?” (85).

York para pedir asignaciones especiales utilizaron una justificación similar, animándose entre sí con el rumor de que una millonaria había muerto y dispuesto que su herencia se distribuyera en los centros de bienestar social. Todos esos acontecimientos indican que la gente procura legitimar lo que hace aun cuando se rebela, y que la autoridad de las élites para determinar qué es legítimo y qué no lo es sigue en pie, incluso durante los períodos de tensión y disturbios.

No obstante, lo que nos interesa destacar es que, cualquiera sea la posición que uno adopte acerca de la inquietud de las masas, se admite por lo general que para que los pobres salgan de la apatía y abriguen esperanzas, dejen de lado la quiescencia y se permitan la indignación, es necesario que se produzcan perturbaciones extraordinarias en toda la sociedad.¹⁴ Al menos en este punto, coinciden los teóricos de las más diversas orientaciones. Además, hay motivos para pensar que en las protestas de las décadas del treinta y del sesenta había una cantidad de dislocaciones coincidentes. Dicho esto, su implicación para comprender el potencial de la influencia política entre los pobres se hace patente: *puesto que los períodos de dislocaciones sociales profundas no son frecuentes, tampoco lo son las oportunidades de insurrección para las clases bajas.*

¹⁴ Refiriéndose a las profundas y complejas conmociones sociales que determinan las huelgas de masas, Rosa Luxemburgo comenta casi lo mismo: “Para cualquier organismo que dirija el movimiento proletario, es sumamente difícil prever y calcular cuáles son las ocasiones y los momentos que pueden acabar en explosiones y cuáles no [...] porque en cada acción individual de la lucha entran en juego tantos y tan importantes momentos económicos, políticos y sociales, generales y locales, materiales y psicológicos, que ninguna acción individual puede plantearse y resolverse como un problema matemático [...] La revolución no es una maniobra que el proletariado emprende en un campo abierto; más bien, es una lucha que se desenvuelve en medio de la incesante dislocación, el desmoronamiento y el desplazamiento sin pausa de todos los fundamentos sociales” (245).

La insurgencia adquiere forma

Así como la vida institucional impone la aquiescencia y sus cambios determinan los estallidos de descontento, el contexto institucional en cuyo seno transcurre la vida y el trabajo de los seres humanos también determina las formas de la protesta política. Esta aseveración nos parece obvia, pero por lo común se la pasa por alto, en parte porque la tradición pluralista define la acción política esencialmente como una cuestión de opciones. Cualesquiera sean los actores políticos, se los contempla como si no estuvieran restringidos por un entorno social cuando han de decidir entre una estrategia política u otra; según esta visión, todo ocurre como si las estrategias utilizadas por los distintos grupos fueran producto de una elección libre, en lugar de ser el resultado de restricciones impuestas por su ubicación dentro de la estructura social. En esta sección haremos un esbozo más que preliminar para analizar de qué manera las características de la vida institucional perfilan las expresiones de rebeldía.

- EL SISTEMA ELECTORAL EN CUANTO INSTITUCIÓN ESTRUCTURANTE

Al menos en las primeras etapas de un movimiento opositor, en Estados Unidos la principal institución estructurante es el sistema representativo electoral. Esta tesis es importante porque no significa que el sistema electoral constituya un ancho cauce en circunstancias normales. Todo lo contrario: vamos a demostrar que, por lo general, los pobres pueden tener cierta influencia cuando estalla el malestar en las clases bajas en las fronteras de los procedimientos electorales pues la inestabilidad y la polarización que así amenazan crear con sus acciones en las fábricas o en las calles pueden arrancar alguna respuesta por parte de los líderes de la política electoral. Sin embargo, el hecho de que la acción surja en las fábricas o en las calles puede depender del desenvolvimiento

de las fases iniciales de oposición en las elecciones.

Por lo común, la desaprobación se expresa al principio en el cuarto oscuro por la simple razón de que, rebeldes o no, los ciudadanos han sido socializados en el seno de una cultura política que define las elecciones como el mecanismo idóneo para producir cambios. No es posible comprender la vitalidad de esa cultura política, el control que ejercen las normas que encauzan el descontento político por los canales electorales, repitiendo que la ideología política liberal es omnipresente en Estados Unidos y que hay un vacío de otras ideologías: precisamente ese es el fenómeno que tenemos que explicar. Algo nos sugieren ciertas características del sistema electoral mismo, con sus rituales, festividades y recompensas, porque esos ritos refuerzan la confianza en los procedimientos electorales. Por ese motivo, es significativo que se otorgara el derecho al voto a los hombres de la clase trabajadora en un período muy temprano de la historia de Estados Unidos, y que se desarrollara un vigoroso sistema de gobiernos locales. A través de esos mecanismos, una gran proporción de la población quedó incluida en los rituales de las campañas electorales, compartió las gratificaciones simbólicas del sistema de elecciones y algunos también compartieron las gratificaciones más tangibles de un patrocinio gubernamental concedido con relativa mano abierta. Las opiniones nutridas de este modo no se desmoronan fácilmente.

Así, un cambio abrupto de los perfiles tradicionales de votación es uno de los primeros indicios de malestar popular en los Estados Unidos de nuestros días.

En cierto sentido, el sistema electoral sirve para medir y registrar la magnitud de la inquietud naciente. Así, en las arrolladoras elecciones de 1932, la clase trabajadora urbana reaccionó ante la catástrofe económica dejando de votar al Partido Republicano, al cual había dado apoyo más o menos desde 1896. Análogamente, el

impacto político de las fuerzas de la modernización y las migraciones internas se hizo evidente por primera vez en las cruciales elecciones presidenciales de 1956 y 1960. Los negros de las ciudades –que habían votado a los demócratas en proporciones cada vez más grandes desde 1936– comenzaron a pasarse a las filas republicanas o dejaron de votar.

En esa etapa, los primeros signos de inestabilidad política inducen por lo común a los líderes en pugna a aplacar el malestar de los grupos descontentos con pronunciamientos conciliatorios. Cuanto mayor es la magnitud de las defecciones o cuanto más enconada es la competencia entre las élites políticas, más probable es que se recurra a ese apaciguamiento simbólico. Pero, si los motivos de perturbación y cólera son graves –y sólo cuando son graves y persistentes– es probable que las actitudes conciliadoras inflamen a las masas pues, de hecho, implican que algunos de los dirigentes de mayor nivel del país se identifican con la indignación de los humildes.

Además, así como los dirigentes desempeñan un papel nada despreciable en fogonear a las masas, también contribuyen a dar forma a sus demandas. Esas declaraciones que se ofrecen en calidad de apaciguamiento simbólico pueden, en cambio, aportar el elemento donde coagulen las angustias incipientes y la ira informe que mueve a las masas. Así fue que, algunos pronunciamientos retóricos prematuros de los líderes políticos liberales –incluidos entre ellos algunos presidentes– acerca de los “derechos” de los trabajadores y de los negros no sólo sirvieron para azuzar el descontento de los obreros y los negros sino que contribuyeron a concentrarlo en torno a las exigencias expresadas por altos funcionarios de la nación.

Sin embargo, cuando se acicatea así el espíritu del pueblo sin aplacarlo concretamente, la protesta puede rebasar los límites de los rituales electorales e incluso desbordar el cauce trazado por las normas políticas del sistema representativo electoral en general. De hecho, las acciones pueden tomar matices

de rebeldía pero, aunque esa rebelión a menudo parece caótica desde la perspectiva de la política norteamericana clásica o desde la perspectiva de algunos organizadores, no lo es en absoluto: es un comportamiento político estructurado. Cuando se producen disturbios populares en las calles, la conducta de quienes participan sigue un patrón social dentro del cual las acciones emprendidas son, en alguna medida, deliberadas y tienen una meta.

- LA SITUACIÓN SOCIAL Y LAS FORMAS DE REBELDÍA

Se ha puesto mucho empeño en explicar los orígenes de la insurgencia, pero se ha prestado comparativamente muy poca atención al tema de por qué la insurgencia adopta una forma en lugar de otra cuando surge. En otras palabras, ¿por qué algunas veces la gente hace huelga, otras veces hace un boicot y en otras circunstancias se dedica a saquear o a provocar incendios? Tal vez sea infrecuente plantearse esta pregunta porque el comportamiento rebelde a menudo parece amorfo a los ojos de los analistas y, por consiguiente, no es susceptible de explicación, como ocurría en el siglo XIX con la enfermedad mental. Así, Parsons califica de “irracionales” las reacciones a la tensión (1965); Neil Smelser describe el comportamiento colectivo como algo “primitivo” y “mágico”, y Kornhauser atribuye a los movimientos de masas tendencias inestables, extremistas y antidemocráticas. De esta suerte, muchas formas de las acciones de masas que no llegan a ser levantamientos armados simplemente no son reconocidas como un comportamiento político inteligente.

La frecuente y falsa asociación de la protesta de las clases bajas con la violencia puede ser también un resabio de esa tradición, y su visión de la turba como un elemento peligroso carente de normas: la barbarie desencadenada. Sin duda, la violencia de masas es una entre muchas formas de protesta y tal vez sea demasiado elemental pues reniega de las mismas reglas

fundacionales de la sociedad civil. Los grupos de clase baja recurren de tanto en tanto a la violencia, la destrucción de propiedades y el ataque a ciertas personas. Tal vez este tipo de acciones sea más probable cuando la gente está privada por su situación institucional de la oportunidad de recurrir a otras formas de oposición. Pero lo habitual, sin embargo, es que la gente no sea violenta, aunque pueda ser militante. Y no lo es simplemente porque los riesgos son demasiado grandes: las penas correspondientes al uso de la violencia por parte de los pobres son realmente temibles y abrumadoras. (Desde luego, la oposición de la clase baja acaba a menudo en violencia cuando grupos más poderosos – desconcertados o atemorizados por la indocilidad de los pobres– recurren a la fuerza para amansarlos. La importante historia de violencia vinculada con los movimientos de protesta en Estados Unidos es una crónica compuesta casi totalmente por las bajas sufridas por los insumisos a manos de legiones armadas públicas o privadas.)

Estas diversas maneras de mirar las cosas nos han dejado imágenes que sirven para desacreditar los movimientos de la clase baja negándoles significado y legitimidad, pero no aportan explicación alguna. Si bien el debilitamiento de los controles sociales que acompaña las fracturas de la vida social puede ser una precondition importante para los levantamientos populares, no se infiere de allí que la infraestructura de la vida social se derrumbe lisa y llanamente o que los que reaccionan contra estas perturbaciones con rebeldía sean los que más afectados están por la desorientación y la alienación. Por el contrario, bien puede suceder que los más capaces para atribuir sus tribulaciones a sus gobernantes y no a sí mismos, y los más aptos para conglomerarse en formas de protesta colectiva sean, precisamente, los que tienen su vida arraigada en algún contexto institucional y mantienen relaciones habituales con otros que se hallan en situación similar. Así pues, si bien muchos de los negros sureños que participaron en el movimiento por los derechos civiles eran pobres, habían emigrado hacía poco a las

ciudades o no tenían trabajo, estaban unidos entre sí por las iglesias negras del sur, que se transformaron en el núcleo movilizador de las acciones.

Así como en Estados Unidos las instituciones electorales canalizan la protesta por la vía del voto, y pueden incluso restringirla a ese ámbito si las alteraciones no son graves y el sistema electoral sensible, otras características de la vida institucional determinan la forma que adopta la protesta cuando desborda el dique de la política electoral. En consecuencia, no es de extrañar que algunos hagan huelga, ni que otros causen disturbios, saqueen los graneros o quemen las máquinas pues, así como las pautas de la vida cotidiana garantizan la quietud de las masas, esas mismas pautas determinan en alguna medida qué forma tendrá la rebelión cuando estalle.

En primer lugar, las personas experimentan las privaciones y la opresión en un contexto concreto, no como la consecuencia final de procesos amplios y abstractos, y es la experiencia concreta la que moldea su descontento transformándolo en quejas específicas contra objetivos específicos. Los obreros tienen la experiencia de la fábrica, el ritmo acelerado de la cadena de montaje, el capataz, los espías y los guardias de seguridad, el propietario y el salario. No experimentan el capitalismo monopólico. Las personas que reciben prestaciones de seguridad social tienen la experiencia de las salas de espera deplorables, el supervisor o el asistente social y el subsidio de desempleo. No experimentan la política de asistencia social norteamericana. Los inquilinos sufren el cielorraso con goteras y los radiadores fríos y reconocen al propietario. No reconocen al sistema bancario, al inmobiliario ni al de la construcción. Por lo tanto, no es de extrañar que, cuando los pobres se rebelan, con frecuencia lo hagan contra el supervisor, contra el dueño del tugurio donde viven o contra el comerciante intermediario, y no contra los bancos ni las élites gobernantes a los que el supervisor, el dueño del tugurio o el comerciante también están sometidos. En

otras palabras, es la experiencia cotidiana la que orienta las quejas, determina la medida de los reclamos y señala los objetos de enojo.

En segundo lugar, los perfiles institucionales encauzan los movimientos de masas al moldear la colectividad de la que puede surgir la protesta. La vida institucional reúne o separa a las personas, forja la identidad de los grupos y atrae a la gente hacia los contextos en los que puede estallar la acción colectiva. Así, el trabajo en las fábricas reúne a hombres y mujeres, los forma en una experiencia común y les enseña las posibilidades de cooperación y acción colectiva. Por el contrario, los trabajadores temporarios y los dueños de pequeñas empresas están dispersos por sus ocupaciones y, por lo tanto, es menos probable que perciban los elementos comunes de su situación y que se unan en una acción colectiva.

En tercer lugar y más importante, los roles institucionales determinan las oportunidades estratégicas para los actos de rebeldía ya que, generalmente, la gente protesta rebelándose contra las reglas y las autoridades relacionadas con las actividades cotidianas. Así, los trabajadores protestan haciendo huelga. Pueden hacerlo porque los reúne el contexto de la fábrica y sus protestas consisten más que nada en rebelarse contra las reglas y desafiar a las autoridades relacionadas con el lugar de trabajo. Los desocupados no hacen huelga, ni pueden hacerlas, aun cuando perciban que los dueños de las fábricas y empresas tienen la culpa de sus problemas. En cambio, causan disturbios en las calles donde se ven forzados a deambular o irrumpen en los centros asistenciales, y es difícil imaginarlos haciendo otra cosa.

Sin embargo, se afirma constantemente que deberían hacer otra cosa, y es en esas afirmaciones donde la influencia (así como también lo absurdo) de la visión pluralista se vuelve tan evidente. Cuando se niegan los límites impuestos por la situación institucional, se desacredita la protesta de inmediato, como ocurre cuando se denuncia a

los insurgentes por no haber reconocido los verdaderos centros de poder y haber atacado un objetivo equivocado con los medios equivocados. Así, los que administran los programas de asistencia social reprenden a sus beneficiarios por causar disturbios en sus sedes y proponen que en lugar de eso aprendan a ejercer presión sobre el poder legislativo estadual o el Congreso. Pero los beneficiarios del servicio social no pueden viajar a la capital del estado o de la nación con facilidad, y cuando lo hacen, por supuesto, se los pasa por alto. No obstante, a veces logran causar disturbios en los centros de asistencia social y eso es más difícil de pasar por alto.

En la misma línea de argumentación, una de las críticas más asiduas al movimiento estudiantil pacifista, con frecuencia planteada por los ex simpatizantes, afirmaba que era insensato que los estudiantes protestaran contra la Guerra de Vietnam mediante la participación en manifestaciones en las universidades y el ataque a rectores y profesores que no tenían responsabilidad alguna en la política de guerra. Los críticos alegaban que era evidente que no eran las universidades las que estaban librando la guerra, sino el complejo militar-industrial. Sin embargo, los estudiantes no eran tan ingenuos. Las exigencias de la acción de masas son tales que ellos estaban obligados a manifestar su rebelión dentro de las universidades donde se encontraban físicamente y podían actuar colectivamente, y donde, además, cumplían un rol del que dependía la institución, de modo tal que sus acciones eran importantes.

Dado que nuestros ejemplos podrían sugerir otra cosa, debemos decir llegado este punto que la tendencia de atribuir la evolución de estrategias políticas a la libertad de elección no es exclusiva de los que tienen grandes intereses en preservar alguna institución, ya sea que se trate de directores de programas de asistencia social o de profesores universitarios. La tendencia tampoco es exclusiva de los que tienen creencias políticas más conservadoras. Los dirigentes de izquierda hacen exactamente la misma

suposición cuando convocan a la clase trabajadora a organizarse de una u otra manera y a perseguir una u otra estrategia política, aun a la luz de pruebas contundentes de que las condiciones sociales impiden esas opciones. Las oportunidades para rebelarse no surgen del análisis de las estructuras de poder. Si existe un genio para organizar, consiste en la capacidad de percibir lo que puede hacer la gente en determinadas condiciones y ayudarla a que lo haga. Sin embargo, en realidad, la mayoría de las organizaciones pretende que la gente haga lo que no puede hacer, y el resultado es el fracaso.

Por lo tanto, nuestra segunda afirmación general es que las oportunidades para la rebelión están estructuradas por las características de la vida institucional. Dicho de manera más sencilla: la gente no puede rebelarse contra instituciones a las que no tiene acceso y en las que no participa.

El efecto limitado de la rebeldía de las masas

Si la rebeldía de las masas no está al alcance de todos ni las formas que adquiere están determinadas libremente, también hay que decir que por lo general tiene un efecto político limitado. Aun así, algunas formas de protesta parecen tener más efecto que otras y, por lo tanto, plantean un interrogante analítico de considerable importancia. Sin embargo, es una pregunta que los analistas, especialmente los analistas de los movimientos norteamericanos contemporáneos, por lo general no han formulado. La bibliografía cuenta con numerosos ejemplos de estudios sobre los orígenes sociales de quienes protestan, sobre los factores determinantes de los estilos de liderazgo, sobre las luchas para lidiar con los problemas que acarrea el mantenimiento de la organización. En consecuencia, parece que la indagación sobre la protesta surge por los numerosos y fascinantes aspectos de la vida social que esta saca a la luz. No obstante, se

hacen menos preguntas sobre su aspecto más importante, a saber, que la protesta y la rebeldía son los instrumentos mediante los cuales los menos privilegiados buscan arrancar concesiones a sus gobernantes.

Creemos que la manera más útil de pensar sobre la eficacia de la protesta es analizar los efectos perturbadores que las diferentes formas de rebeldía de las masas tienen sobre las instituciones y luego analizar las repercusiones políticas de esas perturbaciones. En otras palabras, el efecto de la rebeldía de las masas no se siente de forma directa sino más bien de manera indirecta. Es más probable que la protesta tenga un efecto muy negativo cuando los que protestan desempeñan un papel central en una institución, y es más probable que haya repercusiones políticas más amplias cuando existen grupos poderosos que tienen grandes intereses en la institución afectada. En la bibliografía sobre los movimientos sociales, prácticamente se pasa por alto esta relación: no hay estudios que clasifiquen y analicen las formas de protesta y rebelión, los contextos en que se manifiesta la resistencia, las alteraciones institucionales que ésta acarrea y las diversas repercusiones políticas de ellas.

- LOS LÍMITES DE LAS ALTERACIONES INSTITUCIONALES

Hablar de una alteración institucional es simplemente destacar el hecho evidente de que la vida institucional depende de avenirse a los roles establecidos y cumplir con las reglas vigentes. Por eso, la rebeldía puede impedir el normal funcionamiento de las instituciones. Cuando los obreros hacen huelga o hacen una sentada, se cierran fábricas; cuando las multitudes exigen subsidios sociales, las burocracias del estado de bienestar se ven sumidas en el caos; cuando sus inquilinos se niegan a pagar el alquiler, los propietarios pueden entrar en bancarrota. En todos esos casos, la gente ya no se aviene al rol institucional acostumbrado; niega su cooperación habitual

y, al hacerlo, ocasiona alteraciones institucionales.

Según nuestra definición, perturbar o alterar significa sencillamente aplicar una sanción negativa, negarse a dar la colaboración fundamental de la que otros dependen, y es, por lo tanto, un recurso natural para ejercer poder sobre otros. De hecho, individuos y grupos vinculados entre sí a través de distintas formas de cooperación –los grupos productores en particular– utilizan con frecuencia esta forma de poder. Por ejemplo, los agricultores no llevan sus productos al mercado para hacer subir el precio que ofrecen los compradores; los médicos se niegan a atender a los pacientes a menos que paguen los honorarios que exigen; las empresas petroleras no venden productos ni brindan servicios hasta que se les hacen concesiones en los precios.

Sin embargo, el grado de influencia que obtiene un grupo cuando utiliza este tipo de sanciones negativas varía considerablemente. Pues la influencia depende, en primer lugar, de si la colaboración que se niega es fundamental para los demás; en segundo lugar, de si los que se ven perjudicados necesitan esos recursos; en tercer lugar, de si el grupo que obstruye puede protegerse de las represalias. Una vez planteados estos criterios, se hace evidente que los pobres están, por lo general, en la posición menos estratégica para beneficiarse si se rebelan.

Por eso, en comparación con la mayoría de los grupos productores, las clases bajas se encuentran a menudo en una situación institucional débil para utilizar esas acciones como táctica para obtener influencia. Muchas personas de clase baja se encuentran en situaciones en las que su cooperación no es vital para el funcionamiento de instituciones importantes. Los que trabajan en empresas de escasa importancia desde el punto de vista económico, los que tienen funciones secundarias en empresas importantes o los que están desocupados no cumplen funciones de las que dependan instituciones importantes. Sin duda, a veces algunos

sectores pobres están tan lejos de participar de manera significativa en las instituciones que la única “colaboración” que pueden negar es la de la obediencia civil: pueden provocar disturbios.

Además, los que administran las instituciones en las que participan muchas personas de clase baja a menudo tienen pocas concesiones para hacer a los que alteran el orden. Cuando los grupos de clase baja desempeñan un papel importante en una institución, como ocurre en los talleres donde se explota a los obreros o en las casas de inquilinato ubicadas en barrios míseros, esas instituciones —con frecuencia dirigidas por empresarios de poca monta— a veces no pueden ceder mucho terreno en respuesta a la presión que reciben.

Por último, los grupos de clase baja tienen poca capacidad para protegerse de las represalias que pueden utilizar los administradores de las instituciones. Para entender esto, los pobres no necesitan estudiar la historia de las ocasiones en las que se ha encarcelado o matado a tiros a los manifestantes. La lección sobre su vulnerabilidad está grabada a fuego en su vida cotidiana: es evidente en cada golpiza policial, en cada desalojo, en cada empleo perdido, en cada interrupción de los subsidios sociales. Los mismos términos utilizados para describir la rebeldía de la clase baja —los términos peyorativos de “ilegalidad” y “violencia”— dan testimonio de esa vulnerabilidad y sirven para justificar duras represalias cuando éstas se aplican. Cuando damos por sentados esos términos sin prestarles mayor atención, no reconocemos lo que esos acontecimientos realmente representan: una estructura de coerción política inherente a la vida cotidiana de la clase baja.

Ahora podemos pasar a considerar la relación entre las alteraciones del orden y la espontaneidad, tal vez otro vestigio de maneras tradicionales de pensar sobre los motines originados por la clase baja. Sin embargo, aquí el tema es un poco más complejo. Los disturbios en sí no son

necesariamente espontáneos, pero los de la clase baja con frecuencia lo son, en el sentido de que no están planificados ni son llevados a la práctica por organizaciones formales. En parte, eso muestra que los pobres carecen de recursos organizativos estables y también muestra la naturaleza cauta y moderada de las organizaciones que logran sobrevivir. Pero, aunque las organizaciones formales existieran y aunque para poder sobrevivir no se vieran obligadas a utilizar tácticas más prudentes, las circunstancias que llevan a la rebeldía de las masas en la clase baja son muy difíciles de predecir; y una vez que esta estalla, los líderes tienen dificultades para controlar su curso. El análisis de Rosa Luxemburgo sobre las huelgas de masas es pertinente en este contexto:

[...] la huelga de masas no se “hace” artificialmente, no se “decreta” de un día para el otro, no se “propaga”, sino que es un fenómeno histórico que en determinado momento surge, con necesidad histórica, de las relaciones sociales. [...] Proponerse convertir la huelga de masas en general, como una forma de la acción proletaria, en el objeto de una agitación metódica, e ir de casa en casa para pregonar esa “idea” y ganar poco a poco a la clase obrera, sería una ocupación tan ociosa, tan vana y descabellada como emprender una campaña de propaganda en favor de la idea de revolución o de la lucha en las barricadas [...] (231-245).

Sin embargo, aunque las clases bajas por lo general no tienen mucho poder para causar perturbaciones, y aunque no planifiquen cómo lo usarán, en definitiva ese poder módico es el único que tienen. El uso de ese poder, la evaluación de sus riesgos y beneficios, no se calcula en salas de directorio; brota de las terribles tribulaciones por las que pasa el pueblo en momentos de crisis y tensión. Y en esos momentos, las alteraciones que causan los pobres pueden tener repercusiones que van más allá de las instituciones en las que esas acciones se llevan a cabo.

- LOS LÍMITES DE LAS ALTERACIONES POLÍTICAS

Lo que finalmente pone a prueba el poder de los pobres no es el efecto que causan los tumultos sobre determinadas instituciones: es el efecto político de esos tumultos. Sin embargo, en este nivel, interviene otra serie de mecanismos de estructuración porque el efecto político de las alteraciones institucionales está mediado por el sistema representativo electoral.

Las respuestas a las alteraciones varían según la situación electoral. Por lo general, durante períodos de estabilidad, los dirigentes del gobierno tienen tres opciones bastante evidentes cuando se produce una alteración institucional. Pueden no tenerla en cuenta; pueden tomar medidas punitivas contra los que la provocaron o pueden intentar una conciliación. Si el grupo que provocó las alteraciones tiene por sí solo poca influencia política, como sucede con los grupos de clase baja, no le prestarán atención o lo reprimirán. Es más probable que lo pasen por alto cuando la institución que sufrió las alteraciones no es fundamental para la sociedad en su conjunto ni para otros grupos más importantes. Por eso, si hombres y mujeres pierden el control y atacan el tejido de su propia comunidad, como en el caso de los barrios míseros de inmigrantes del siglo XIX, el espectáculo puede ser aterrador, pero puede quedar restringido a los barrios míseros: no tendrá necesariamente un gran efecto sobre la sociedad en su conjunto, ni sobre el bienestar de otros grupos importantes. Análogamente, cuando la turba empobrecida exige subsidios sociales, puede causar estragos en los centros asistenciales, pero el caos en esos centros no constituye un gran problema para la sociedad en su conjunto ni para grupos influyentes. Es más probable que se recurra a la represión cuando se ven afectadas instituciones de importancia, como cuando los empleados ferroviarios hicieron huelga y causaron disturbios a fines del siglo XIX, o cuando la policía hizo huelga en Boston a fines de la

Primera Guerra Mundial. De una u otra manera, los pobres generalmente suponen que la respuesta por parte del gobierno será pasarlos por alto o castigarlos, porque esas son las reacciones que generalmente reciben.

Pero los movimientos de protesta no surgen durante períodos comunes y corrientes; surgen cuando hay cambios de gran escala que socavan la estabilidad política. Como dijimos anteriormente, es ese contexto el que da esperanzas a los pobres y permite, para empezar, que la insurgencia sea posible. Es ese contexto también el que vuelve a los dirigentes políticos algo sensibles a las protestas de los pobres.

En épocas de rápidos cambios económicos y sociales, los dirigentes políticos tienen mucha menos libertad para pasar por alto los disturbios o para aplicar medidas punitivas, pues, en esos momentos, es probable que la relación entre los dirigentes y sus simpatizantes se vuelva imprevisible. Esa situación política de inestabilidad hace que el régimen sea mucho más vulnerable a los disturbios ya que no sólo existe una mayor probabilidad de que entren en actividad grupos que antes no participaban sino que el alcance del conflicto se amplíe, según la terminología de Schattschneider, en momentos en que las alineaciones políticas ya se volvieron imprevisibles.

Cuando los dirigentes políticos no están seguros de que los apoyan, incluso los disturbios que no están restringidos a instituciones periféricas no se pueden ignorar sin correr riesgos porque la mera aparición de problemas supone una amenaza mayor cuando las alineaciones políticas son inestables. Además, cuando las instituciones afectadas son fundamentales para la producción económica o la estabilidad de la vida social, es imprescindible restablecer su funcionamiento habitual para que el régimen conserve el apoyo de sus simpatizantes. Así, cuando los obreros industriales se sumaron a las huelgas masivas durante la década del treinta, significaron una amenaza para la economía de toda la nación y, dada la

inestabilidad electoral de esa época, constituyeron una amenaza para el futuro de toda la dirigencia política. En esas circunstancias, el gobierno difícilmente podía pasar por alto las perturbaciones que originaban.

Sin embargo, en la década del treinta, el gobierno tampoco podía correr el riesgo que conlleva utilizar una fuerza colosal para sojuzgar a los huelguistas. En otras palabras, no podía sencillamente valerse de la alternativa de la represión. Por un lado, los trabajadores que hacían huelga, como los ciudadanos que se manifestaban por los derechos civiles en la década del sesenta, habían despertado un fuerte apoyo entre grupos que eran partidarios fundamentales del régimen. Por otro lado, a menos que los grupos insurgentes estén prácticamente en situación marginal —lo que permitiría a los dirigentes del régimen encender el odio popular en su contra— la situación de inestabilidad política vuelve riesgoso el uso de la fuerza porque no se puede predecir con certeza cuáles serán las reacciones de otros grupos afectados. Cuando el gobierno no puede hacer caso omiso de los insurgentes y no quiere arriesgarse a sufrir las imprevisibles repercusiones del uso de la fuerza, se empeñará en calmar a los manifestantes y desarmarlos.

Por lo general, los esfuerzos para apaciguar a los manifestantes adoptan diversas formas. En primer lugar y más evidente, los dirigentes políticos ofrecen concesiones o ejercen presión sobre las élites del sector privado para que éstas reparen algunos de los agravios más apremiantes —tanto simbólicos como concretos— que sufre el grupo que causa perturbaciones. Así, las turbas de desocupados de la década del treinta recibieron subsidios sociales; los obreros de las fábricas que hacían huelga obtuvieron aumentos salariales y una jornada laboral más corta y los iracundos manifestantes que defendían los derechos civiles en la década del sesenta consiguieron que los espacios públicos no estuvieran segregados.

Ya sea que se consideren esas medidas como una prueba de la capacidad de las instituciones políticas norteamericanas para llevar a cabo reformas o se las descarte como una mera fachada, los dirigentes del gobierno no otorgaron esas concesiones de buena gana. En cada uno de los casos, y en algunos casos más que en otros, las reformas exigieron que el gobierno ya no mantuviera su perfil establecido de complacer a las élites del sector privado. Así, se continuó aplicando la política liberal de asistencia social del New Deal a pesar de la generalizada oposición del sector empresario. Análogamente, los obreros que hicieron huelga a mediados de la década del treinta lograron arrancar aumentos salariales al sector privado sólo porque los dirigentes políticos del estado y de la nación abandonaron la antigua política de utilizar su poder de coacción para poner fin a las huelgas. Del mismo modo, permitir la utilización de espacios públicos sin segregación racial exigió que los dirigentes nacionales del partido Demócrata se volcaran en contra de sus aliados tradicionales en el seno de las élites de plantadores sureños. En todos esos casos, los que protestaban obtuvieron concesiones sólo cuando, preocupados por su propia supervivencia, los dirigentes políticos finalmente se vieron obligados a actuar de una manera que despertó la feroz oposición de las élites económicas. En pocas palabras, en situaciones de gran inestabilidad electoral, la alianza entre el poder público y el privado a veces se debilita, aunque sólo sea por poco tiempo, y en esos momentos, los pobres que se rebelan pueden obtener beneficios.

En segundo lugar, los dirigentes políticos, o las élites aliadas con ellos, intentan apaciguar los tumultos no sólo ocupándose de resolver los agravios más urgentes sino también esforzándose para canalizar las energías y el enojo de los que protestan hacia formas de comportamiento político más legítimas y menos perturbadoras, esfuerzo que se traduce, en parte, en ofrecer incentivos a los líderes del movimiento; en otras palabras, cooptarlos. Así, en las décadas del treinta y del sesenta, se fomentó que quienes se

manifestaban exigiendo planes sociales aprendieran a utilizar procedimientos administrativos para expresar sus agravios en lugar de irrumpir “simplemente” en las oficinas de asistencia social. Al mismo tiempo se ofrecían a los líderes puestos de consejeros de los administradores de esas oficinas. En la década del sesenta, los organizadores de los movimientos por los derechos civiles dejaron las calles y aceptaron puestos en los programas de la Gran Sociedad; y a medida que los disturbios se extendían por las ciudades del norte, se alentaba a los líderes callejeros de los guetos a “dialogar” con los funcionarios municipales, al punto que a algunos se les ofrecieron puestos en organismos municipales.

En tercer lugar, es posible que el propósito de las medidas promulgadas por el gobierno en momentos de alteración del orden no sea apaciguar a los manifestantes sino minar cualquier apoyo que el grupo que protesta haya podido despertar en un público más amplio. Por lo general, eso se logra mediante nuevos programas que parecen cumplir con las exigencias morales del movimiento, y de esa manera lo privan de apoyo sin conceder demasiado en materia de beneficios concretos. Un ejemplo destacado fue la aprobación de disposiciones relativas a las pensiones de la ley de Seguridad Social. Los ancianos que participaron en el movimiento Townsend exigían pensiones de doscientos dólares mensuales, sin condiciones, y lograron convencer a unas veinticinco millones de personas que firmaron los petitorios correspondientes. Al final, la ley de Seguridad Social, si bien brindó cierta seguridad económica para muchos futuros ancianos, no hizo nada por los miembros del movimiento Townsend, a ninguno de los cuales se le adjudicó un plan de seguros vinculado al trabajo porque ya no trabajaban. La mayoría de ellos, de todos modos, habrían muerto para cuando comenzaran a efectuarse los pagos, unos siete años más tarde. Sin embargo, las disposiciones relativas a las pensiones de la ley de Seguridad Social fueron una respuesta a las exigencias morales del movimiento. En principio, el gobierno había

actuado para proteger a los ancianos de Estados Unidos, y de esa manera cortó con cualquier sentimiento de identificación entre los que serían ancianos en el futuro y los que ya lo eran. De hecho, la ley de Seguridad Social disminuyó el apoyo del público hacia el plan Townsend, a pesar de que no ofreció ningún beneficio concreto para las personas que ya eran mayores. Hay muchos otros ejemplos de reacciones gubernamentales que socavan el apoyo del público. En la década del sesenta, los tan anunciados programas federales para los guetos no se idearon ni financiaron para lograr un efecto significativo sobre la pobreza o los traumas de la vida en los guetos. Pero la publicidad vinculada con esos programas –los anuncios con bombos y platillos sobre la “guerra contra la pobreza” y la creación de “ciudades modelo”– fue muy eficaz para calmar a los liberales que apoyaban a los negros de las ciudades.

Por último, esas medidas en apariencia conciliatorias también permiten al gobierno emplear sin riesgo medidas represivas. Habitualmente, los líderes y los grupos más rebeldes, o los que desprecian las concesiones que se les ofrecen son señalados como objetivos para un accionar policial arbitrario o un hostigamiento legal más formal mediante investigaciones en el Congreso o en los tribunales. En el contexto de los muy publicitados esfuerzos gubernamentales para disminuir los motivos de queja de los grupos descontentos, es poco probable que medidas coercitivas de este tipo despierten la indignación del público favorable a los rebeldes. Ciertamente, esa estrategia doble es útil en otro sentido porque sirve para rodear de un aura de equilibrio y sensatez a la acción gubernamental.

Sin embargo, lo principal es sencillamente que el efecto político de las alteraciones institucionales depende de la situación electoral. Incluso las acciones graves, como las huelgas industriales, obligan al gobierno a ofrecer concesiones sólo cuando la ecuación de inestabilidad electoral favorece a los que protestan. E incluso en tales momentos, cuando los que protestan logran que el

gobierno les dé una respuesta, no consiguen imponer su contenido. Con respecto a la variedad de circunstancias específicas que determinan cuánto ganarán los que protestan y cuánto perderán, todavía nos queda mucho que aprender.

- MUERTE DE LAS ACCIONES DE PROTESTA

No es de extrañar que, en conjunto, esos esfuerzos para calmar o desarmar a los que protestan generalmente lleven a la muerte del movimiento, en parte transformándolo, y en parte, modificando el clima político que alimenta la protesta. Con esos cambios, se restablece el conjunto de controles institucionales que por lo general restringen la protesta y, una vez más, se niega influencia política a las clases bajas.

Dijimos que una reacción posible por parte del gobierno es hacer concesiones a los que protestan y darles algo de lo que exigen, ya sea simbólico o concreto. Pero el simple hecho de otorgar esas concesiones probablemente no tenga mucha importancia a la hora de explicar por qué declina un movimiento. Por un lado, en general, lo que se concede es modesto por no decir exiguo; por otro lado, incluso las concesiones modestas demuestran que la protesta “es eficaz”, circunstancia que puede acicatear un movimiento o apaciguarlo fácilmente.

Sin embargo, por lo general, las concesiones no vienen solas. Cuando se otorgan, generalmente forman parte integral de un paquete de medidas para reencauzar el movimiento hacia los canales políticos normales e incorporar a sus líderes concediéndoles roles institucionales estables. Así, el derecho de los obreros industriales a formar un sindicato, adquirido en la década del treinta en respuesta a huelgas masivas que alteraban el orden, se tradujo en que se exigió a los obreros utilizar los procedimientos para expresar quejas recién establecidos en lugar de recurrir a las sentadas o la huelga no autorizada; y los nuevos dirigentes sindicales –relacionados en

ese momento con la gerencia de la fábrica e integrantes de los consejos del partido Demócrata— se convirtieron en los defensores ideológicos y organizadores de esa estrategia de normalidad y moderación. Análogamente, cuando los negros adquirieron el derecho al voto en el sur e influencia en las municipalidades del norte en respuesta a los tumultos de la década del sesenta, los líderes negros fueron incorporados a la política electoral y burocrática y se convirtieron en los defensores ideológicos del desplazamiento “de la protesta a la política” (Rustin).

Esa característica de la acción gubernamental merece una explicación porque las principales medidas de re-integración —el derecho a organizarse, el derecho al voto, la representación de los negros en el gobierno de la ciudad— también fueron respuestas a exigencias específicas planteadas por los que protestaban. Todo indicaba que el gobierno sólo actuaba para reparar lo que se percibía como un agravio. Sin embargo, el proceso no fue de ninguna manera tan lineal. Como sugerimos anteriormente, los movimientos habían surgido de la interacción con las élites, y se vieron impulsados a plantear las demandas como respuesta al aliento que recibieron inicialmente por parte de dirigentes políticos. Tampoco fue fortuito que los dirigentes políticos llegaran a proclamar como justas ciertas causas como el derecho a organizarse, el derecho al voto o el derecho a la “participación ciudadana”. En todos los casos, las élites respondieron al descontento proponiendo reformas que ya habían puesto en práctica en otros casos y que consistían principalmente en extender procedimientos ya establecidos a nuevos grupos o nuevos ámbitos institucionales. La negociación colectiva no se inventó en la década del treinta, ni el derecho al voto se concedió en la década del sesenta. Impulsados por la agitación, los dirigentes políticos propusieron reformas que en cierto sentido habían sido prefiguradas en acuerdos institucionales que ya existían, tomados de un repertorio de tradiciones anteriores. Y un pueblo enardecido respondió engiando

sencillamente lo que los dirigentes políticos habían dicho que debería tener. Si por un accidente de la historia hubieran hecho otra cosa, por ejemplo, si los obreros industriales hubieran exigido la nacionalización de las fábricas, es probable que, de obtener algo, habrían conseguido de todos modos el derecho a sindicalizarse; y si los negros sureños empobrecidos hubieran exigido la reforma agraria, también es probable que hubieran obtenido el voto de todos modos.

Al mismo tiempo que el gobierno se esfuerza por reintegrar a los grupos descontentos y encauzarlos hacia formas de comportamiento menos perturbadoras para la política, también toma medidas para aislarlos de potenciales simpatizantes y, al hacerlo, socava la moral del movimiento. Por último, mientras esas influencias erosionan el movimiento, se seduce a los dirigentes con nuevas oportunidades, y se aplaca, confunde o desanima a los simpatizantes. El espectáculo del uso de la fuerza para reprimir los elementos rebeldes termina por aniquilar a los pocos que quedan.

Sin embargo, los cambios de mayor alcance no se producen dentro del movimiento, sino en el contexto político que lo alimentó en primer lugar. Los agitadores y rebeldes que componen el movimiento son sólo una pequeña parte de la población descontenta de la que han surgido. Suponemos que si se coopta a algunos líderes, surgirán otros; si se apacigua o desalienta a algunos participantes, otros ocuparán su lugar. Pero eso no ocurre porque las respuestas del gobierno no sólo destruyen el movimiento, sino que también transforman el clima político que hace posible la protesta. Las concesiones que se otorgan a los que protestan, los esfuerzos por “integrarlos al sistema” y, en especial, las medidas dirigidas a sus potenciales simpatizantes, todo contribuye a crear una imagen convincente de un gobierno benévolo y receptivo que repara los agravios y soluciona los problemas. Por ende, disminuye cualquier apoyo que pudiera haber existido en la población en general. Además, el despliegue de la benevolencia gubernamental

estimula a grupos adversarios y despierta los sentimientos de antagonismo de sectores más neutrales. La “corriente de la opinión pública” empieza a cambiar: en la década del treinta, se volvió contra los trabajadores, y a fines de la década del sesenta, contra los negros. Cuando se produce un viraje semejante, las definiciones propuestas por los dirigentes políticos también cambian, especialmente cuando los presionan aspirantes a cargos políticos que perciben el cambio en el sentimiento popular y, a través de ese cambio, las debilidades que tiene un funcionario. Así, a fines de la década del sesenta, los líderes republicanos se aprovecharon del resentimiento de los blancos hacia los negros para captar votantes demócratas, exigiendo a gritos “mano dura” y “trabajo, no asistencia social”: palabras clave del antagonismo racial. Ese cambio es un mal presagio. Donde alguna vez las poderosas voces de la tierra enunciaban una retórica que les daba coraje a los pobres, ahora enuncian una retórica que arrasa la esperanza e instala el temor. Este punto debería quedar claro: cuando se combinan diversas circunstancias como éstas, la rebeldía ya no es posible.

- LO QUE QUEDA DE LA REFORMA

Cuando la protesta se calma, es posible que algunas concesiones se anulen. Así, cuando los desempleados se vuelven dóciles, la lista de beneficiarios de subsidios se acorta aunque muchos todavía sigan desocupados. Cuando los habitantes del gueto se tranquilizan, vuelven los desalojos. La razón es bastante sencilla: puesto que los pobres ya no constituyen una amenaza y ya no ejercen influencia sobre los dirigentes políticos, la conciliación no es necesaria. Eso sucede particularmente en un clima de hostilidad política creciente ya que es probable que las concesiones otorgadas se conviertan en el foco del resentimiento de otros grupos.

Pero algunas concesiones quedan. Cuando la ola de agitación retrocede, a veces siguen en pie ciertos cambios institucionales importantes. Así, el derecho de los

trabajadores a afiliarse a sindicatos no se dejó sin efecto cuando disminuyó la agitación (aunque sí se anularon algunos de los derechos concedidos a los sindicatos). Y no es probable que se quite el derecho al voto otorgado a los negros sureños (aunque precisamente eso fue lo que ocurrió en el período posterior a la Reconstrucción). ¿Por qué se retiran algunas concesiones mientras que otras se convierten en reformas institucionales permanentes?

Tal vez la respuesta sea que, si bien algunas de las reformas otorgadas durante períodos de agitación son costosas o causan disgusto a diversos grupos de la sociedad, y, por lo tanto, sólo se toleran bajo presión, otras innovaciones resultan compatibles (o por lo menos, no son incompatibles) con los intereses de grupos más poderosos, y lo que es más importante, con los intereses de los grupos económicos dominantes. Esta afirmación tiene un halo de teoría conspirativa, pero, de hecho, el proceso no tiene nada de conspirativo. Los grandes industriales se opusieron a la sindicalización, pero una vez obligados a conceder ese derecho como precio de la paz en el sector de la industria, descubrieron poco a poco que los sindicatos constituían un mecanismo útil para regular la fuerza de trabajo. El problema de disciplinar llevaba ya más de un siglo, pero la depresión generó tumultos políticos a partir de los cuales se forjó una solución. Tampoco se llegó a esa solución de la nada. Como observamos anteriormente, la negociación colectiva era una metodología de probada eficacia para enfrentar los disturbios por motivos laborales. Los motines de la década del treinta volvieron imprescindible el uso de ese método; una vez implementadas, las reformas se institucionalizaron porque siguieron resultando útiles.

Análogamente, las élites económicas sureñas no tenían ningún interés en conceder el derecho al voto a los negros, pero tampoco tenían ya tanto interés en quitarles ese derecho. La antigua economía de plantaciones cedía el paso a las nuevas empresas industriales; las élites de plantadores eran

reemplazadas por los grupos económicos industriales dominantes. Los acuerdos políticos feudales de los que dependía la economía de plantaciones ya no tenían una importancia fundamental y, sin duda, no la tenían para las nuevas élites económicas. Al obligar a que se extendiera el derecho al voto y se modernizara la política sureña, los levantamientos de los negros ayudaron a sellar una grieta en el tejido institucional de la sociedad norteamericana, grieta que había surgido de la creciente incoherencia entre las instituciones económicas y políticas del sur.

Lo que sugieren estos ejemplos es que los que protestan obtienen, si es que logran obtener algo, lo que las circunstancias históricas ya han preparado para concederles. Sin embargo, como dijo Alan Wolfe, los gobiernos no cambian mágicamente a partir de una “transformación histórica radical”, sino sólo a partir de las luchas concretas de la época (154). Cuando finalmente la gente se moviliza para protestar contra todo pronóstico, aprovecha las únicas opciones que están a su alcance dentro de los límites impuestos por sus circunstancias sociales. Quienes se niegan a reconocer esos límites no sólo relegan ciegamente las protestas de las clases bajas al ámbito de lo semirrational, sino que también continúan simulando ciegamente que otras opciones más habituales para obtener influencia política están al alcance de todos en el sistema político norteamericano.

Un comentario sobre el papel de los líderes en las acciones de protesta

El principal argumento de este capítulo es señalar que las condiciones sociales encauzan tanto las limitaciones como las oportunidades para la protesta de las masas. Se puede hacer un resumen de las implicaciones del papel de la dirigencia en los movimientos de protesta, que consignamos a continuación.

La protesta brota en respuesta a cambios de suma importancia en el orden institucional. No es una creación de los organizadores ni de los líderes.

Una vez que estalla la protesta, las formas particulares que toma dependen en gran medida de las características de la estructura social. Los organizadores y dirigentes que elaboran estrategias sin tener en cuenta la situación social de quienes buscan movilizar fracasan inevitablemente.

Las élites reaccionan ante las alteraciones institucionales que genera la protesta, como también ante otros poderosos imperativos institucionales. Las exigencias de los dirigentes y organizadores no determinan las reacciones de las élites de manera significativa. Las organizaciones formalmente estructuradas de los pobres tampoco tienen un efecto significativo sobre las reacciones de las élites. Cualquier influencia que los grupos de las clases más bajas ejercen ocasionalmente sobre la política norteamericana no proviene de la organización, sino de la protesta de masas y las perturbaciones que causa la protesta.

Por último, la protesta en Estados Unidos ha sido intermitente y pasajera, ya que a medida que cobra fuerza, también lo hacen las diversas formas de acuerdos y coacciones institucionales que tienen como resultado restaurar la quietud. Los dirigentes y los organizadores no pueden evitar que decaiga la protesta ni tampoco que se debilite cualquier influencia que ésta le haya dado a la clase baja. Sólo pueden intentar obtener todo lo que puedan mientras sea posible.

Así, los movimientos de protesta son moldeados por las condiciones institucionales y no por los esfuerzos intencionales de los dirigentes y organizadores. Las limitaciones son grandes y no son fáciles de superar. Sin embargo, dentro de esos límites creados, todavía existe cierta libertad de acción para los esfuerzos intencionales. Los organizadores y los dirigentes optan por hacer una u otra cosa, y lo que deciden afecta en cierta medida el curso del movimiento de protesta. Si su campo de libertad de acción no llega a ser lo que ellos quisieran, tampoco se amplía cuando continúan con sus planes como si los límites institucionales en realidad

no existieran y adoptan estrategias que hacen caso omiso de ellos. Lo más sensato es comprender esas limitaciones y aprovechar al máximo la libertad de acción que exista para extender la influencia potencial de la clase baja. Si nuestras conclusiones son acertadas, lo que eso significa es que se deben buscar estrategias que refuercen en cada etapa el ímpetu y el efecto de la protesta.

Con estas proposiciones en mente, nos ocuparemos ahora de analizar los movimientos de protesta recientes.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, Costa Esping, and Friedland, Roger. "Class Structure, Class Politics and the Capitalist State." Madison: University of Wisconsin. September 1974, mimeographed.
- Ash, Roberta. *Social Movements in America*. Chicago: Markham Publishing Co., 1972.
- Balbus, Isaac D. "The Concept of Interest in Pluralist and Marxian Analysis." *Politics and Society* 1 (1971).
- Bloom, Howard S., and Price, Douglas H. "Voter Response to Short-Run Economic Conditions: The Asymmetric Effect of Prosperity and Recession." *American Political Science Review* 69 (December 1975).
- Bridges, Amy. "Nicos Poulantzas and the Marxist Theory of the State." *Politics and Society* 4 (Winter 1974).
- Burnham, Walter Dean. "The Changing Shape of the American Political Universe." *American Political Science Review* 59 (1965).
- ----- . *Critical Elections and the Mainsprings of American Politics*. New York: W. W. Norton and Co., 1970.
- Campbell; Angus; Converse, Philip E.; Miller, Warren E.; and Stokes, Donald E. *The American Voter*. New York: John Wiley and Sons, 1960.
- Castells, Manuel. "L'Analyse Interdisciplinaire de la Croissance Urbaine." Paper presented at a colloquium of the Centre National de la Recherche Scientifique, June 1-4, 1971, in Toulouse.
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.

- Davies, James C. "Toward a Theory of Revolution." *American Sociological Review* 27 (1962).
- Dollard, John, et al. *Frustration and Aggression*. New Haven: Yale University Press, 1939.
- Edelman, Murray. *Politics as Symbolic Action*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Engels, Frederick. "Socialism: Utopian and Scientific." In *Engels: Selected Writings*, edited by W. O. Henderson, Baltimore: Penguin Books, 1967.
- -----."Introduction to Karl Marx's 'The Class Struggles in France, 1848-1850.'" In *Selected Works*, Vol. 1, by Karl Marx and Frederick Engels. New York: International Publishers, 1970.
- Feierabend, Ivo; Feierabend, Rosalind L.; and Nesvold, Betty A. "Social Change and Political Violence: Cross National Patterns." In *Violence in America: A Staff Report*, edited by Hugh Davis Graham and Ted Robert Gurr. Washington, D.C.: U. S. Government Printing Office, 1969.
- Flacks, Richard. "Making History vs. Making Life: Dilemmas of an American Left." *Working Papers for a New Society* 2 (Summer 1974).
- Gamson, William A. *The Strategy of Social Protest*. Homewood, Illinois: Dorsey Press, 1975.
- Geschwender, James. "Social Structure and the Negro Revolt: An Examination of Some Hypotheses." *Social Forces* 3 (December 1964).
- Gordon, David M.; Edwards, Richard C.; and Reich, Michael. "Labor Market Segmentation in American Capitalism," Paper presented at the Conference on Labor Market Segmentation, March 16-17, 1973, at Harvard University.
- Gurr, Ted Robert. "Psychological Factors in Civil Violence." *World Politics* 20 (January 1908).
- -----. *Why Men Rebel*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970.
- Gusfield, Joseph R., ed. *Protest, Reform and Revolt: A Reader in Social Movements*. New York: John Wiley and Sons, 1970.
- Hobsbawm, Eric. *Primitive Rebels*. New York: W. W. Norton and Co., 1963.
- -----, and Rudé, George. *Captain Swing*. New York: Pantheon Books, 1968.
- Howard, Dick, ed. *Selected Writings of Rosa Luxemburg*. New York: Monthly Review Press, 1971.
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.
- James, C. L. R.; Lee, Grace C.; and Chaulieu, Pierre. *Facing Reality*. Detroit: Bewick Editions, 1974.
- Katznelson, Ira. "The Crisis of the Capitalist City: Urban Politics and Social Control." In *Theoretical Perspectives in Urban Politics*, edited by W. D. Hawley and Michael Lipsky. New York; Prentice-Hall, 1976.
- Kornhauser, William. *The Politics of Mass Society*. New York: The Free Press, 1959.
- Kramer, Gerald H. "Short-Term Fluctuations in U. S. Voting Behavior, 1896-1964." *American Political Science Review* 65 (March 1971).
- Lefebvre, Henry. *Everyday Life in the Modern World*. London: Allen Lane, The Penguin Press, 1971.

- Lipsky, Michael. "Protest as a Political Resource." *American Political Science Review* 62 (December 1968).
- ----- . Protest in City Politics. Chicago: Rand McNally, 1970.
- Lodhi, Abdul Qaiyum, and Tilly, Charles. "Urbanization, Crime, and Collective Violence in 19th Century France." *American Journal of Sociology* 79 (September 1973).
- Lupsha, Peter A. "Explanation of Political Violence: Some Psychological Theories Versus Indignation." *Politics and Society* 2 (Fall 1971).
- Luxemburg, Rosa. "Mass Strike Party and Trade Unions." In *Selected Writings of Rosa Luxemburg*, edited by Dick Howard. New York: Monthly Review Press, 1971.
- Marx, Karl. *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. New York: International Publishers, 1963.
- -----, and Engels, Frederick. *Manifesto of the Communist Party*. New York: International Publishers, 1948.
- Michels, Robert. *Political Parties*. Glencoe: The Free Press, 1949.
- Moore, Barrington. "Revolution in America?" *New York Review of Books*, January 30, 1969.
- Ollman, Bertell. "Toward Class Consciousness Next Time: Marx and the Working Class." *Politics and Society* 3 (Fall 1972).
- Parsons Talcott, *The Social System*. New York: The Free Press, 1951.
- -----"An Outline of the Social System." In *Theories of Society: Foundations of Modern Sociological Thought*, edited by Talcott Parsons, Edward Shils, Kaspar D. Naegle, and Jesse R. Pitts. New York: The Free Press, 1965.
- Poulantzas, Nicos. *Political Power and Social Classes*. London: New Left Books and Sheed and Ward, Ltd., 1973.
- Rudé, George. *The Crowd in History*. New York: John Wiley and Sons, 1964.
- Rustin, Bayard. "From Protest to Politics." *Commentary* 39 (February 1965).
- Schattschneider, E. E. *The Semi-Sovereign People*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1960.
- Schwartz, Michael. "The Southern Farmers' Alliance: The Organizational Forms of Radical Protest." Unpublished Ph.D. dissertation, Department of Sociology, Harvard University, 1971.
- Smelser, Neil J. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press, 1962.
- Snyder, David, and Tilly, Charles. "Hardship and Collective Violence in France, 1830-1960." *American Sociological Review* 37 (October 1972).
- Spencer, Joseph; McLoughlin, John; and Lawson, Ronald. "New York City Tenant Organizations and the Formation of Urban Housing Policy, 1919 to 1933." Unpublished paper of The Tenant Movement Study, New York, Center for Policy Research, 1975.
- Tilly, Charles. "Reflections on the Revolution of Paris: A Review of Recent Historical Writing." *Social Problems* 12 (Summer 1964).
- Useern, Michael. *Conscription, Protest and Social Conflict: The Life and Death of a Draft Resistance Movement*. New York: John Wiley and Sons, 1973.
- ----- . *Protest Movements In America Indianapolis*: Bobbs-Merrill, 1975.

- Weber, Max. *Essays in Sociology*. Translated, edited, and with an Introduction by H. H. Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford University Press, 1946.
- Wilson, James Q. *Political Organizations*. New York: Basic Books, 1973.
- Wilson, John. *Introduction to Social Movements*. New York: Basic Books, 1973.
- Wolfe, Alan. "New Directions in the Marxist Theory of Politics." *Politics and Society* 4 (Winter 1974).
- Zald, Mayer N., and Ash, Roberta. "Social Movement Organizations: Growth, Decay and Change." *Social Forces* 44 (March 1966).

